TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Ref: Ejecutivo de Interamericana de Carbones y Transportes S.A.S.-. c/. Carbones Guachetá IMG EU. Exp. 25843-31-03-001-2022-00012-01.

Pasa a decidirse el recurso de apelación interpuesto por la interesada Yeimy Viviana González Duarte contra el auto de 28 de marzo último dictado por el juzgado civil del circuito de Ubaté, mediante el cual denegó el incidente de levantamiento de medidas cautelares promovido por la recurrente, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

Al instaurar la demanda, en que busca la ejecutante el recaudo de las facturas AB781, AB803, AB804, AB810, AB811, AB812, AB813, Ab 818, Ab819 y AB823 expedidas entre julio y septiembre de 2019 por la prestación de servicio de transporte de carbón, más los intereses moratorios, pidió cautelar la volqueta marca Dodge de placas VSD-580, de propiedad de la demandada, medida que, inscrita y, tras la aprehensión del automotor, dio lugar a que el a-quo dispusiera su secuestro, diligencia que llevó a cabo en comisión el juzgado promiscuo municipal de Guasca el 28 de octubre del año anterior.

Oportunamente, Yeimy Viviana González Duarte solicitó por vía incidental el levantamiento de la cautela, aduciendo al efecto que es la poseedora y propietaria del vehículo desde enero de 2021, cuando lo adquirió de manos de la sociedad demandada, que para ese momento era representada por su padre, Martín Emilio González Quiceno, como se demuestra con el correspondiente contrato de compraventa y el mandato que concedió para la realización del trámite de traspaso, el que si bien no se hizo, dado que la persona encargada no cumplió con su encargo, no impidió que desde ese día ella y su hermano empezaran a ostentar posesión.

A lo que se opuso la ejecutante dentro del proceso, alegando que esas pruebas documentales exhibidas por la incidentante, amén de extrañas [pues ni siquiera se indica quién fue el mandatario, ni se explica por qué hay dos formatos de la misma hoja, uno diligenciado y otro con espacios en blanco y por qué sólo uno de los contratantes le hizo presentación personal en notaría], son insuficientes en el propósito de acreditar la posesión alegada, menos cuando en el propio incidente se dice que ésta es ejercida en asocio con otra persona.

Mediante el proveído apelado, denegó el juzgado el levantamiento de la medida, determinación contra la cual se alza la incidentante en recurso que le fue concedido en el efecto devolutivo y que, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II. El auto apelado

A vuelta de unas breves apuntaciones teóricas sobre la posesión, descendió al análisis de las pruebas, destacando que la versión de la incidentante no coincide con la prueba documental, pues mientras en ésta y en la solicitud incidental se expresa que aquélla adquirió el vehículo por compra, al declarar dijo que mientras su hermano Camilo Andrés compró la mitad del vehículo, su padre le regaló a ella la otra mitad, añadiendo que éste no se encontraba vinculado a ninguna empresa; y aquél aseguró que estaba inscrito en Carbones Guachetá IMG; por su parte, Wilson

Efrén Duarte Moscoso, tío de la incidentante, dijo desconocer todo lo relacionado con la negociación del vehículo, pero que alguna vez escuchó a su hermano decir que lo dejaba para el sustento de sus hijos; su otro tío Abel Ernesto Duarte Moscoso, señaló que escuchó del negocio y que ha visto a Camilo trabajando en el carro, quizá por algún acuerdo con Yeimy, al paso que éste último dijo que hicieron el negocio del vehículo con su padre, que él asumió el valor de algunos arreglos que requería el automotor y que la persona que lo tenía en su poder para la fecha de la inmovilización trabaja para él; versiones que, valoradas en conjunto, impiden concluir en la posesión alegada como base del pedimento incidental, máxime que si bien señalaron que lo de los ingresos se lleva en formatos escritos para contabilidad, no aportaron ninguna prueba de ello.

III. El recurso de apelación

Lo despliega sobre la idea de que las pruebas del incidente demuestran que la incidentante ostenta el *animus* y el *corpus* respecto del vehículo, pues, en asocio con su hermano, quien no figura en el contrato de compraventa por un acuerdo interno entre ellos, ha ostentado la posesión desde que le fue vendido en 2021, esto es, antes de que se promoviera la ejecución, tiempo desde el cual ha tenido la posesión material y también el dominio, de acuerdo con esos documentos aportados al proceso, los que tienen presentación personal en notaría, por lo que si el traspaso no se logró por falta de gestión de la tramitadora a la que se le encargó dicha diligencia y la falta de conocimiento de la opositora en esos temas, ello no desvirtúa que ya se creía propietaria, especialmente cuando el representante legal de la sociedad, su padre, falleció; de esos documentos y de los testimonios es posible concluir que acreditó de forma sumaria su señorío, lo que autoriza el levantamiento de las cautelas, pues de haberse inscrito el contrato, figuraría ella como propietaria, venta que es válida pues la legislación no prohíbe la venta entre padres e hijos.

Consideraciones

La averiguación primordial en que debe entrar el juzgador al resolver una controversia como la que viene dada en el asunto es, a no dudarlo, la constatación del fenómeno posesorio alegado por quien apela a un incidente de esta clase, cuestión en que, ciertamente, ha menester además establecer su actualidad, desde luego que lo que otorga su razón de ser a este tipo de incidencias es precisamente que al momento de la diligencia exista ese señorío; anotación que se hace necesaria así, de entrada, porque ya descendiendo a los autos no ve la Corporación que de las pruebas con que fue abastecido el incidente efunda una posesión como la que se esgrime como base de los pedimentos incidentales impetrados por la recurrente, desde luego que, en estas condiciones, el auto apelado debe confirmarse.

Claro, decir que por efecto de ese contrato que aporta la incidentante a la actuación, adquirió dominio, es algo válido a la hora de argumentar la posesión, cual se aduce en el incidente y se insiste en el recurso, por supuesto que el dominio no puede descartarse a la hora de establecer ese hecho posesorio, en sí considerado; después de todo, éste es el signo visible del derecho de dominio. Mas, la objeción que se le hace al planteamiento incidental no está en qué fue lo que ocurrió con el contrato y qué razón impidió que su inscripción en el registro terrestre automotor se verificara, traspiés que a la postre y por cuenta de lo dicho es indiferente en el contexto incidental, sino al hecho de que la carga probatoria que pesaba en la incidentante no se colmó en los términos que la situación reclama, básicamente porque ésta no se satisface simplemente remarcando la validez y seriedad de la negociación; antes bien, de cargo de la recurrente era demostrar, con medios probatorios consistentes y macizos, que efectivamente a la fecha de la diligencia ostentaba posesión, pues esa pesquisa era y es la que debe abordar el juzgador en aras de definir ese debate incidental.

La peticionaria, sin hacer cuenta de ello, consideró que a ese propósito le bastaba la demostración del contrato, cosa que, ya se apuntó, no es así, menos aún si,

adicionalmente, su postura en el trámite del incidente se ofrece inconsistente y enmarcada en una serie de contradicciones que, bien miradas, se erigen como indicios en su contra, por supuesto que si el juzgador puede extraer de la conducta procesal de los contendientes indicios en su contra, es más que imperativo deducirlos en un caso como el de ahora, donde se aprecian esas inconsistencias en la incidentante.

A la verdad, que presentando el contrato de marras, diga la recurrente que adquirió el vehículo de manos de la sociedad Carbones Guachetá Img EU, el 21 de enero de 2021, cual ciertamente asoma del documento, que no tiene fecha de suscripción pero sí la presentación personal en notaría por el representante de la sociedad, y después, en su declaración, afirme que la realidad del contrato fue otra, pues en verdad no fue solo ella quien compró el vehículo en cuestión sino también su hermano Camilo Andrés, quien adquirió de la sociedad la mitad de éste y que a ella su extinto padre le regaló el otro 50%, son aspectos que, escrutados en esa averiguación que concierne al juzgador cuando tiene que definir acerca de la posesión, acaban desdiciendo de la veracidad de ese señorío que se esgrime como fundamento de sus aspiraciones incidentales.

Ahora, pensar que esto pudo suceder no puede descartarse de plano. Sin embargo, si ello fue así, no entiende el Tribunal por qué el silencio sobre ello al impetrarse el incidente, y menos que ni siquiera la peticionaria sugiera que recibió lo comprado, pues al respecto destaca que al referirse a la compra simplemente anotó que el automotor quedó en Cali y ella iba viajaba aproximadamente tres veces al año, *“cuando se requería algo en algún tema de mi papá”*. Obviamente, si empezando con esto ya desde muy temprano afloran estas inconsistencias, es muy difícil creer, con la certidumbre que demanda un asunto tan delicado como el debatido, que todo eso del contrato derivó ciertamente en posesión.

Cierto, a lo largo del incidente se recibieron otras pruebas. Los testimonios de Wilson Efrén y Abel Ernesto Duarte Moscoso, tíos de la incidentante, quienes en sus relatos narraron que conocieron de la negociación porque en vida el padre de Yeimi Viviana decía que les iba a dejar el vehículo a sus hijos para su sustento; mas, eso nada aporta en pos del averiguado señorío que se discute, y en cambio ofrece algunos ingredientes que ponen en entredicho la seriedad de la negociación, sobre todo porque si la volqueta siguió estando bajo égida de la sociedad, en el sitio en que se venía trabajándola, de esperarse era que la sedicente poseedora probara que más allá de esas circunstancias, quién se encargaba de gestionar esa explotación ante la entidad era ella y no que viajaba esporádicamente, cuando las necesidades de su ‘padre’ y no del vehículo, así lo demandaban.

Lo otro, hay evidencia de que unos meses antes de que se aprehendiera el vehículo, éste había sido traído del Valle del Cauca al departamento de Cundinamarca, y que en esos días se le hicieron unas reparaciones cuyo costo sufragó Camilo Andrés, el hermano de la recurrente; y fue desde entonces que él se encargó de la explotación del automotor en fletes y transporte de carbón, como lo señalaron éste y los hermanos Duarte Moscoso, quienes suponen que entre la incidentante y Camilo Andrés existe un acuerdo para la explotación del automotor; no obstante, ese tipo de especulaciones en los testigos no es suficiente para entender que el día de la diligencia la incidentante ejercía esa posesión alegada, especialmente si esos actos que relatan los declarantes respecto de su sobrino Camilo Andrés, no pasan de ser simples actos materiales, que si bien, nadie lo niega, constituyen una forma de exteriorizar la intención de dominio, en asuntos como el de ahora no excusan la prueba de ese elemento subjetivo que integra el fenómeno posesorio.

Verdaderamente, si todo sugiere que lo que determinó el cambio en la explotación del vehículo fue la muerte de ese socio y representante legal de la sociedad unipersonal propietaria, es obvio que para desterrar toda

equivocidad sobre el señorío demandaba, como se viene repitiendo, la presentación de unos elementos probatorios muy fuertes, que valorados bajo las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, permitan colegir que esa manera de proceder tenía como antecedente un señorío exclusivo y excluyente, y solo de la incidentante, algo que, definitivamente, no puede establecerse de las pruebas traídas al proceso, pues los empeños probatorios de la recurrente se quedaron en esos aspectos del contrato que se mencionaron, al punto que, incluso, alegándose que la posesión pasó de la sociedad a la incidentante, nada aclara en la actuación por qué lo tocante con la gestión del automotor lo mantuvo la empresa, la de su “*papá, Carbones Guachetá*”.

La jurisprudencia dice no es posible exhibir una “*relación posesoria*” donde “*media la duda o dosis de incertidumbre*”; dado que, “*para hablar de desposesión del dueño y privación de su derecho, el contacto material de la cosa con quien pretende serlo, aduciendo real o presuntamente ‘animus domini rem sibi habendi’, requiere que sea cierto y claro, sin resquicio para la zozobra*” (Cas. Civ. Sent. de 29 de noviembre de 2017, exp. SC19903-2017); y si aquí lo que se advierte a cada momento es la brumosisidad al respecto, información vaga de una relación sujeto-cosa de la que en concreto nadie da razón, el incidente no podía salir adelante.

Lo anterior es suficiente para confirmar el auto apelado; las cosas del recurso, por su parte, se impondrán con sujeción a la regla 1ª del precepto 365 de estatuto procesal vigente.

IV.- Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el auto impugnado de fecha y procedencia preanotados.

Costas del incidente a cargo de la recurrente. Tásense por la secretaría del a-quo, en el momento procesal oportuno, incluyendo la suma de \$350.000 por concepto de agencias en derecho de esta instancia.

En firme, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

**German Octavio Rodriguez Velasquez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Civil Familia**

Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7079381f64daaa67ebc5842609d034415027ddf8ee034df46343bd5937aeda0f**

Documento generado en 29/05/2023 02:59:20 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**